

90 % de la población quiere un cambio político

Venezuela: ¿más conflictos o una transición ordenada?

Piero Trepiccione*



TARINGA

Cómo podría generarse un proceso de transición política en la Venezuela actual es algo que pudiera orientarse en dos direcciones posibles: el escenario conflictivo o el escenario de la transición ordenada. Es altamente necesario rescatar la política y sus métodos para dirimir diferencias

El 2017 ha sido extremadamente complicado tanto en lo político como en lo económico. No se equivocaron los analistas del país cuando en sus proyecciones del año 2016 señalaban la complejidad creciente y profunda que le esperaba a los venezolanos por estos días y eso es precisamente lo que ha venido ocurriendo. Por un lado, el deterioro constante de los indicadores económicos con consecuencias nefastas para la cotidianidad de la población y, por el otro, las dificultades enormes de poder concebir una gobernabilidad mínima entre los actores políticos que garantice un programa integral de políticas públicas necesarias para relanzarnos como nación.

En medio de todo, una propuesta de asamblea nacional constituyente puesta sobre el tapete por el propio presidente de la República Nicolás Maduro Moros, alejada de toda conexión popular y además considerada absolutamente innecesaria en el marco de la crisis actual, cuyas bases comiciales han sido rechazadas por la opinión pública aunque formalmente avaladas por las autoridades electorales. Su justificación ha estado soportada sobre la base de ser un mecanismo por excelencia para alcanzar “un diálogo de paz” según palabras de los principales voceros gubernamentales; no obstante ser concebida para generar una especie de “*apartheid* político” donde una minoría gestione una arquitectura institucional que controle la vida de la mayoría. En resumidas cuentas, 2017 es un año pivote donde se puede gestionar el camino a recorrer por los próximos decenios.

EL FIN DE UN CICLO

Independientemente de cuál sea el impacto de la constituyente si esta se llegare a aplicar o no este año, el escenario más cercano a la realidad-país tiene que ver con la finalización de un ciclo histórico en nuestra evolución política. Este ciclo comenzó formalmente a partir de 1998 con la victoria en las urnas electorales de Hugo

Chávez y que dio al traste con el periodo de gobernabilidad establecido bajo los parámetros del célebre *Pacto de Puntofijo*.

La marca bajo la cual se distinguió la pauta del ciclo es la llamada “revolución bolivariana”, que ocupó por cerca de 18 años un lugar privilegiado en el imaginario colectivo de los venezolanos. Dos elementos esenciales han caracterizado el debilitamiento de la marca. En primer lugar el fallecimiento de Hugo Chávez en marzo de 2013. Su hiperliderazgo y la concentración del apoyo popular en su figura no permitió la emergencia de nombres alternativos en el seno del Gran Polo Patriótico que sirvieran de enroques para garantizar la alternabilidad del proceso bolivariano. En segundo lugar, la caída drástica de los precios petroleros en los mercados internacionales que han socavado el modelo político soportado sobre un enorme gasto público sin compensaciones en el ingreso fiscal que permitiese darle sustentabilidad sin el anclaje obligatorio a los hidrocarburos.

Esto nos permite señalar que –*grosso modo*– el país se prepara para una transición del liderazgo y del modelo que pudiera establecerse sobre un nuevo pacto de gobernabilidad. Las sociedades tienen sus ciclos políticos. Son etapas a través de las cuales la población apuntala sus procesos organizativos y establece parámetros en las relaciones de poder. Vienen dados por determinadas circunstancias que estimulan o promueven su concepción. Estas pueden ser políticas, económicas, culturales, belicistas o de diversa índole, incluso mixtas producto de la combinación de múltiples factores disparadores de cambios.

En la Venezuela de hoy estamos en presencia de un fin de ciclo. De un momento determinado de la historia que activa vectores de fuerza social y política cuyas consecuencias están en pleno desarrollo. Ahora bien, cómo podría generarse un proceso de transición política en la Venezuela actual es algo que pudiera orientarse en dos direcciones posibles.

EL ESCENARIO CONFLICTIVO

Para visualizar el momento político actual es necesario observar detenidamente el pulso que la opinión pública venezolana viene tomando en los últimos meses. Revisando estudios y promediándolos, nos damos cuenta que más de noventa por ciento de la población se identifica con un cambio político. A esto le agregamos que ese mismo porcentaje está disconforme con la situación económica actual del país señalando que marchamos en la dirección incorrecta. Estos términos acompasados de opinión pública nos desmontan el fenómeno de la polarización general que fue la “marca” identificatoria del ciclo político que inició en 1998 con la victoria elec-

toral de Hugo Chávez. Son cifras extremadamente contundentes que van más allá de los alineamientos políticos promovidos en polarización.

Los bloques situacionales se ubican en menos de un tercio en el lado del Polo Patriótico y en un cuarenta por ciento del lado opositor. Otro elemento característico del ciclo político actual es el agotamiento sufrido por efecto de la concentración de responsabilidades en relación a la situación económica que atraviesa el país. De cada diez venezolanos prácticamente ocho responsabilizan tanto al Gobierno nacional como al primer mandatario de las consecuencias de la desaceleración de la economía y las penurias causadas por el desabastecimiento y la inflación. Esto se traduce en cansancio con respecto al esquema discursivo y remarcado en la ejecución de políticas públicas desde la perspectiva del Gobierno nacional.

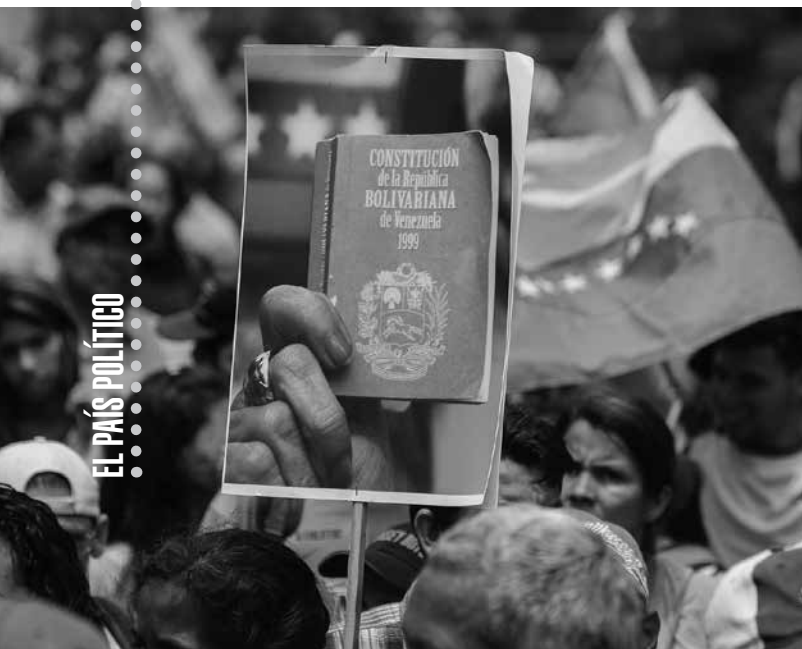
Frente a este marco de opinión pública la reacción del Gobierno ha sido la de querer aferrarse al poder a cualquier precio, cerrando las vías constitucionales para que la nueva mayoría que se ha ido gestando alrededor del descontento se exprese para formalizar un nuevo gobierno.

En 1998 los actores políticos de aquel entonces se negaron a los cambios. No leyeron correctamente el sentimiento generalizado de una población que pedía cambio a gritos. Se produjo un embudo que catapultó una concentración de opinión pública cuya consecuencia fue la terminación de un ciclo político que había iniciado en 1958.

Hoy, está ocurriendo un fenómeno que aunque dista de ser similar es equivalente. La concentración de fuerza popular en contra del manejo administrativo del país es extremadamente alta. Este es el mejor signo indicativo de que –en efecto– ha llegado la hora. Pero ese aferramiento al poder está causando numerosas víctimas fatales a lo largo y ancho del territorio gracias al soporte que las fuerzas armadas le han venido dando a quienes ostentan el Gobierno nacional.



INFOBAE



UNIVISIÓN

En consecuencia, en la medida en que la minoría se repliegue sin favorecer salidas institucionales, los episodios de violencia política pudieran acelerarse hasta llegar a un punto de quiebre que favorezca el otro posible escenario.

EL ESCENARIO DE LA TRANSICIÓN ORDENADA

En medio de las enormes señales conflictivas que hemos venido teniendo como sociedad, se han estado dando intentos importantes para “concertar” salidas negociadas. Hasta el propio papa Francisco con voceros vaticanos, pasando por expresidentes y figuras de la diplomacia internacional, han participado en conversaciones y cónclaves para activar mecanismos constitucionales. La tarea no ha sido fácil por las posiciones cerradas en términos ideológicos puestas sobre el tapete por los voceros del Gobierno nacional y la multiplicidad de criterios esgrimidos por las diferentes visiones del mundo opositor venezolano agrupado en la Mesa de la Unidad.

¿Habrá llegado la hora? La respuesta es sí. Todas las variables políticas, sociales y económicas están convergiendo ahora en un solo punto de concentración. Para procesar esa concentración de vectores de fuerza, la vía —y además la deseada por la mayoría calificada de la población— es el procesamiento constitucional de las diferencias a los efectos de viabilizar un nuevo consenso y modelo de acción pública que atienda rápidamente las causas y consecuencias de la actual crisis del país.

El desafío es grande. Tenemos que volver a la política antes de que esta se muera y dé paso a métodos no democráticos. La primera responsabilidad la tiene el Gobierno y sus voceros prin-

cipales que promueven un discurso de confrontación y no de conciliación. De atrincheramiento y no de apertura. De sesgo ideológico que impide asumir errores en materia económica. Del lado opositor existen también responsabilidades sobre todo en las relacionadas a los intereses particulares y partidistas por encima de la unidad y la falta de claridad estratégica en los objetivos. También en las severas fallas comunicacionales que impiden un correcto entendimiento con las más amplias capas poblacionales del país. Y la sociedad debe articularse mejor para contrastar al Estado cada vez que sea necesario.

Una transición ordenada pasa por una negociación de alto nivel efectuada de manera transparente que arroje resultados claros al país. Una hoja de ruta concertada y con apoyo de la comunidad internacional. En ella obviamente deben interactuar todos los actores políticos e institucionales para que emerja una gobernabilidad mínima que garantice un reacomodo de vectores de fuerzas políticas de acuerdo a su proporcionalidad en respaldo popular y además sirva de marco para consensuar un programa económico de largo alcance que permita atacar de raíz la causalidad de los males que impactan tan negativamente nuestra realidad.

Quizás en medio del ruido actual y la exacerbación de la violencia política, este escenario se ve como el menos probable; pero a mi juicio las condiciones están apuntando hacia esta dirección. Las circunstancias políticas imprimen un dinamismo acelerado que impide que los intereses de los grupos estén por encima de la sociedad. Si el liderazgo interpreta la realidad correctamente puede verse favorecida esta opción de cambio en una forma relativamente ordenada que recaiga en una figura de consenso que cumpla un rol similar al que le tocó cumplir a Valentín Paniagua en el Perú, Patricio Alwyn en Chile o el propio Ramón J. Velazquez en Venezuela.

Es altamente necesario rescatar la política y sus métodos para dirimir diferencias. La Constitución vigente en Venezuela establece en su preámbulo la noción de “democracia protagónica y participativa” como elemento esencial de funcionamiento de las instituciones. Ahora valen más que nunca esos lineamientos constitucionales para usarlos como instrumentos soberanos en las disputas que impiden un real cambio político en la nación. Pero para que este sea el escenario más probable de realizar, la población venezolana debe involucrarse más activamente en los asuntos públicos del país.

*Coordinador general del Centro Gumilla Barquisimeto.